

crónica

COLOMBIA EN FEBRERO DE 1974

Notas sobre el mes que terminó para que usted analice.

Escepticismo ante la Política Económica

Las noticias económicas se acumularon en el mes de febrero. Un movimiento "in crescendo", concentrado alrededor de los problemas monetarios, fue desplazándose a lo largo de los días para alcanzar su climax en el paquete de fuertes medidas presentadas por el Presidente Pastrana al país en la noche del 18 de febrero. El paquete era exclusivamente de orden monetario.

A lo largo de las primeras semanas arreciaron los ataques al gobierno por la situación inflacionaria. El Director de Coltejer, Rodrigo Uribe Echavarría, se lamentaba de la carencia de una auténtica política de precios, cuando en el balance anual de su empresa atribuye a la inflación la causa fundamental del aumento de todas las cifras del activo corriente y el pasivo de la Compañía. Así se veían las cosas desde el lado de los empresarios. Del lado de los consumidores, una lista de 44 productos de riguroso consumo diario, que elevaron sus precios entre el 2 y el 50 por ciento en el mes de enero era revelada por la Corporación de Abastos de Bogotá. Aunque las bajas en otros ramos de la alimen-

tación tendían a equilibrar la situación, la verdad es que los consumidores se percataron de que acababa de transcurrir el mes de enero más caro vivido en Colombia en los últimos 16 años.

Por su parte, grupos de presión como la Andí, denunciaban el deterioro de las sociedades anónimas causado por un mercado de capitales adverso, y los directivos de las centrales obreras de derecha, UTC y CTC, invitaban a adelantar una campaña a escala nacional de exigencia al Gobierno para obligarlo a tomar las medidas necesarias para frenar las alzas.

Inicialmente, el Gobierno respondió a las acusaciones por medio del ministro de Hacienda y repartió responsabilidades achacando la inflación al comportamiento de todo el mundo: productores, distribuidores, consumidores, naciones extranjeras. Por supuesto, sostuvo que el Gobierno también tenía su parte pero que la culpa atribuible a la administración nacional era solo resultado de la eficiencia del actual gobierno que había creado en un año 200 mil nuevos empleos, propiciado un auge sin precedentes de las exportaciones, incentivado la inversión en vivienda que alcanzaba en un año los cuatro mil millones de pesos, etc., etc. Por su parte, Vallejo Mejía, cuya seriedad e inteligencia en el manejo de los problemas agrícolas es encomiable, cayó en el error de la fidelidad ingenua al afirmar que "el año pasado las gentes habían tenido incrementos en sus ingresos que compensaban y sobrepasaban al alza". La verdad es que sí era cierto para los grupos privilegiados del país cuyo poder de compra y capacidad de decisiones crece a una tasa más rápida que la caída vertiginosa del valor de las monedas, pero para la inmensa mayoría de los colombianos la inflación significó la disminución de su salario real y consiguientemente

te la imposibilidad de alcanzar la indispensable canasta familiar.

Por fin el Gobierno pareció moverse a poner hechos consecuentes con sus responsabilidades cuando, a mediados del mes, determinó la desaparición de la Superintendencia de Precios y la creación de una Superintendencia Nacional de Producción y Precios. El propósito del nuevo organismo era dotar al Estado de elementos más efectivos para el cumplimiento de sus fines. Resta decir que los colombianos nos preguntamos escépticamente si no se hacía meramente una nueva edición del viejo e ineficiente instituto, una edición corregida por un nombre más largo y rimbombante.

Así se llegó al 18 de febrero, fecha de las nuevas medidas monetarias. Pastrana Borrero declaró sencillamente sus vacilaciones en asumir las decisiones que esa noche tomaba. Dejó entender claramente que esas vacilaciones respondían a la impopularidad de las limitaciones al crédito por herir intereses de grupos o individuos y se disculpó de tener que hacerlo. Parecía necesario que el gobierno del pueblo del frente social pidiera excusas a sus grupos amigos para hacer algo por el pueblo.

Como ocurre tantas veces, las noticias menos buenas para los grupos poderosos de la economía nacional venían acompañadas esa tarde, de una noticia más buena. Se establecían limitaciones al crédito, pero, quedaba suspendida la renta presuntiva. ¿Un paliativo? De todas maneras, la oportunidad del anuncio simultáneo conllevaba algo de quid pro quo.

El paquete de medidas monetarias iba fundamentalmente dirigido a frenar la oferta de circulante, restringiendo la

emisión primaria y secundaria; mientras se buscaba destruir moneda por el sistema de venta de valores del banco emisor y la exigencia de altos depósitos en pago anticipado por importaciones. Se pretendía, además, crear mecanismos para estimular la capitalización de los bancos como entidades financieras por medio del alza en la tasa de interés y la creación de un cupo de redescuento de 30 millones de dólares para crédito industrial.

El efecto real producido, hasta el momento, por el conjunto de las medidas monetarias es prácticamente imposible de evaluar. Por una parte, hay buenas razones para afirmar que el paquete en conjunto no puede menos de producir un efecto sensible sobre la oferta de circulante y en este caso, si la inflación en Colombia es sustancialmente un problema de exceso monetario, los efectos sobre ella se dejaría sentir en unos meses, evidentemente si no aparecen otros factores alterantes. Por otra parte, es bien probable que las medidas conlleven la paradoja de producir efectos contrarios al esperado: la restricción en el crédito bancario, por ejemplo, podría traer un aumento en el costo de la vida, los industriales de todas maneras usarían el crédito y trasladarían el alza en el valor del capital a los consumidores. Habría que preguntarse también por el efecto de una descapitalización de los bancos (al subirse el encaje y eliminarse los redescuentos), evidentemente, si los inversionistas tienen que recurrir al caro capital extrabancario, el empuje hacia arriba de los costos de producción se regará por todos los mercados.

Pero nuestra inquietud ante las últimas medidas va mucho más allá de los efectos inmediatos. No desconocemos la importancia de los mecanismos monetarios, sin embargo situamos el problema inflacionario en la maquinaria misma de nuestro sistema económico y no en el papel de lubricante

que podría jugar la moneda.

A quienes afirman que la inflación actual es la consecuencia lógica de nuestra bonanza, les decimos que tal afirmación es cierta para el pequeño grupo que concentra los ingresos de los colombianos en cuanto que para ellos crece más la bonanza que los precios. Sin embargo, el mismo mecanismo que acrecienta el poder de los ya ricos corroe la capacidad de compra de los pobres. La inflación es mala desde todos los ángulos para un porcentaje que puede superar el ochenta por ciento de los colombianos, y el que favorezca las ventajas relativas del veinte por ciento restante no solo no lo justifica, sino que la hace indeseable.

Somos escépticos de medidas que no toquen la estructura porque la perversión de nuestra economía no está en que haya crecimiento inflacionario sino en que el crecimiento es para los menos y la pérdida de poder adquisitivo es para las mayorías. Por ese mismo motivo nos hemos opuesto a la propuesta desarrollista.

Atacar la inflación solo con medidas monetarias es olvidarse que, debido a la injusta distribución de los ingresos, en muchos renglones del mercado colombiano los precios sólo revelan las preferencias de las clases pudientes y poco o nada nos dicen de las necesidades primarias de las mayorías; es pasar por alto que la estructura monopolística de nuestra economía determina a su antojo qué poder de compra van a tener en un momento dado las clases populares; es olvidar que el pequeño campesino y el artesano están sometidos a un mercado que para ellos es azar, incertidumbre y misterio, cuestión de buena o mala suerte, nunca predecible. Pero para los intermediarios, comerciantes, dueños de depósitos y especuladores, es la clave mágica que les permite apretar

alternativamente a productores y consumidores, urgidos de subsistencia, o a ambos grupos al mismo tiempo según se les antoje y/o se lo permitan las circunstancias. Atacar solo el problema monetario es olvidarse de las rigideces de nuestra oferta de bienes y de la escasa movilidad de nuestros factores de producción y pensar con el Presidente que se puede ponderar en términos absolutos un crecimiento industrial del 9%, sin advertir que la industria debió crecer más para responder a la demanda, pero que no pudo hacerlo porque encontró copada su capacidad instalada. Es olvidarse de que la burocracia y el serrucho corroen la disponibilidad de factores de un país pobre y juntamente con el monopolio económico-político determinan ineficiencias escandalosas en la asignación de nuestros limitados recursos.

En la perspectiva de estas profundas fallas sistemáticas que están distorsionando nuestra situación se hace urgente encarar con responsabilidad los problemas. No aceptamos en ninguna forma que la promoción del bienestar de las mayorías pobres colombianas esté en contradicción con la eficiencia de nuestra economía. Lo que juzgamos es que ha faltado honestidad, imaginación y valor para afrontar los cambios necesarios.

Para las Memorias del Presidente

Mientras los diversos candidatos a la Presidencia de la República hablan en sus diversos programas o proyectos ideológicos de conservar la paz y de buscar un mejor estar para la población rural, la verdad es que se desarrolla un arduo y desigual combate entre campesinos hambrientos e indefensos y las fuerzas militar-terratenientes, fuertemente representadas en el Parlamento, los partidos y el Gobierno. Preci-

samente en aquel Gobierno de coalición liberal-conservadora que cuatro años atrás prometía, a millones de campesinos desarraigados, políticas agrarias encaminadas a resolver los problemas de tierra, crédito, mercadeo y asistencia técnica, etc.

La siguiente carta enviada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-, el 6 de marzo de los corrientes, al Presidente de la República es el testimonio más claro de esta realidad:

Sr. Dr. Misael Pastrana Borrero
Presidente de la República
Casa de Bolívar

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, nuevamente nos dirigimos a usted con el ánimo de tener respuesta a los graves problemas que estamos abocados debido a las absurdas políticas agrarias trazadas por el Gobierno.

Ante la paralización total de la llamada Reforma Social Agraria, y los efectos de las medidas tomadas por los terratenientes, amparadas por el Gobierno para defender los grandes latifundios en Colombia, ha traído como consecuencia lógica la descomposición del campesinado que no encuentra ninguna solución a los problemas que genera la falta de tierra, trabajo remunerado y estable.

Debido a la inoperancia de la mal llamada Reforma Social Agraria el campesinado ha tenido que entrar a tratar de solucionar el problema de falta de tierra mediante las tomas de ella, hechos más numerosos en el pasado y presente mes, y cuya respuesta por parte de las autoridades ha sido la represión en todas sus formas. Veamos algunos hechos re-

cientes:

El caso de Chimichagua: En el corregimiento de Arjona, finca Barlovento, más de 100 campesinos venían trabajando ese predio, cuando el 26 de febrero se presentaron al lugar de trabajo de los campesinos 3 agentes en estado de embriaguez, e inmediatamente comenzaron a disparar sobre los indefensos campesinos, dejando muerto al instante a un campesino e hiriendo a José Rocha, quien posteriormente murió por falta de atención médica a tiempo, y además dejando varios campesinos heridos gravemente.

Estos agentes se presentaron al predio donde estaban trabajando los campesinos sin ninguna autorización de un juzgado como se requiere en casos de lanzamiento y solamente obedeciendo al terrateniente Gabriel Jarramillo, quien no tiene títulos de propiedad de ese predio por cuanto hace 7 años trata de conseguir los de Juan Acuña, quien sí posee los derechos de ese terreno.

Ahora tratan de hacer aparecer al campesinado culpable de la muerte de dos agentes resultado de la defensa que hicieron los campesinos al ser agredidos por éstos, por causa de lo anterior están sembrando el terror en la zona y buscando afanosamente a los demás "invasores" para someterlos a toda clase de atropellos como están haciendo con los detenidos que se encuentran en Arjona.

El caso de desalojo campesino en la frontera Colombo-Venezolana: El 9 de febrero del presente año fueron desalojadas las últimas 170 familias del Bosque, Montaña de Gomez, Caño Mapurito, del municipio de Fonseca (Guajira).

Ahora el Gobierno trata de disculparse diciendo que

cometió un error dándole títulos, créditos y otros servicios, y cobrándoles impuestos desde luego en unas tierras que ahora dice que había entregado al Gobierno Venezolano. Los campesinos no tienen la culpa que el Gobierno se hubiera equivocado, ese problema es de los dos Gobiernos, pero los campesinos no pueden ir a perder el trabajo de tantos años cuyo valor de las mejoras asciende a 40 millones de pesos colombianos.

Este problema ha sido tratado con mucha negligencia por el Gobierno y un caso que es toda una calamidad para los desalojados. No ha habido la más mínima consideración.

Los campesinos desalojados queriendo resolver en parte este agudo problema se tomaron unos predios incultos en el Cesar y Riohacha; pero como respuesta han encontrado la represión y parte de los 54 detenidos en la cárcel de Riohacha son de éstos desalojados de la frontera.

En la actualidad estas familias se encuentran viviendo en San Pedro, Conejo y Fonseca, en forma infrahumana y el Gobierno será culpable de la muerte de varios niños que se encuentran enfermos por el cambio de clima y las condiciones en que están viviendo. La única solución de los representantes del Gobierno a través de los ministerios ha sido las promesas y quererlos internar en el Caquetá y Arauca, como si no conocieran el fracaso que ha tenido la colonización dirigida por el Estado por falta de vías, falta de un mercado que garantice precios remunerativos a los colonos, falta de servicios médicos, de asistencia social, recordemos los paros cívicos que han tenido que hacer los campesinos de esas zonas para exigir estos servicios, y aún el Gobierno no ha cumplido con las promesas hechas a los campesinos.

En Antioquia, ante la difícil situación del campesinado éste ha tratado de arreglarla tomando tierra para producir, y así lo venían haciendo desde varias semanas en Altamira, cuando el viernes pasado fueron detenidos y encarcelados 24 "invasores" de ese predio; y el domingo fueron encarcelados 3 campesinos en Pueblorrico, Antioquia, por el solo hecho de ser afiliados a la ANUC. En Urrao ha sido militarizado y hay más de mil soldados cuidando las tierras a los terratenientes como si con ésto se arreglara la falta de tierra para más de mil familias que según el mismo Incora hay sin tierra en ese municipio.

En Sucre, como la sola demagogia de la Reforma Agraria, no ha solucionado el problema de la tierra, el campesinado ha tenido que entrar a luchar por ella a igual que en el Huila y otros departamentos.

Ante esta situación la ANUC, solicita del Gobierno entrar a tomar medidas concretas que solucionen este grave problema, pues consideramos que la represión no arregla estos problemas sociales, antes al contrario empeora y agrava la situación del campesinado.

Nuestra Organización Campesina ratifica la defensa de los intereses del campesinado en general, y no descansará hasta no ver solucionados los problemas planteados.

En espera de una respuesta favorable nos suscribimos del señor Presidente.

Fdo. COMITE EJECUTIVO ANUC
(Siguen varias firmas)

Panorama Preelectoral

La agitación preelectoral llenó la vida política del país en estos meses: los diversos candidatos han recorrido el país exponiendo sus tesis. La manifestación que acompañó al candidato liberal López M. en su inscripción en Bogotá pareció demostrar que el liberalismo cuenta con la mayoría del electorado. Para el expresidente Lleras Camargo, el país ya eligió a López. Sin embargo, la posición liberal parece ser demasiado triunfalista al pretender que López ganaría por un millón.

Planteamientos del candidato de la UNO: una transición al socialismo

Echeverri Mejía manifiesta que no es comunista pero considera que el marxismo es una doctrina científica donde deben abreviar todos los que se preocupen por el estudio de la sociedad. El influjo marxista ha llegado incluso a encíclicas papales como Mater et Magistra y Populorum Progressio y a católicos ilustres como el P. Lebrez. En materia religiosa, Echeverri plantea la necesidad de la total separación entre Iglesia y Estado y consiguientemente la abolición del Concordato, pero también ve la necesidad del respeto a la persona en sus costumbres religiosas, cualesquiera que sean.

El ejemplo de Chile sirvió a la UNO de inspiración en cuanto a la necesidad de la unidad popular pero también le sirvió para comprobar que la izquierda no puede llegar al poder por vía electoral en América Latina. La función de la UNO es "preparar a la gente para la toma del poder, crear una conciencia revolucionaria entre el pueblo". Y por ahora, según Echeverri, la forma más efectiva de ir desarrollando esta labor es la vía electoral". En este sentido, "la ver-

dadera tarea de la UNO nace después de las elecciones". Si se logra mantener la unidad, dice Echeverri, "el futuro será nuestro".

Entre los sectores de la UNO hay cada vez mayor compenetración, opina Echeverri, a pesar de las diferencias ideológicas: "No buscamos profundizar en lo que nos divide sino en lo que nos une frente a un enemigo de clase común". El lanzamiento por primera vez de un candidato de izquierda, sin camuflarse como "liberal popular", es un precedente significativo. Hasta ahora las izquierdas no han podido mostrar sus mayorías por "la irrefrenable tendencia a las divisiones internas, a las polémicas abstractas, alejadas muchas veces de la realidad nacional y de las necesidades inmediatas del pueblo colombiano. La UNO es precisamente un esfuerzo por superar ese canibalismo, ese "hara-kiri" político que viven practicando los movimientos de izquierdas". El candidato está convencido de que "si el pueblo no se une, no hay nada que hacer".

El Movimiento Amplio Colombiano (MAC), el grupo del candidato Echeverri, se creó precisamente para trabajar en función de la unidad popular y salió de la ANAPO por la negativa de Rojas P. a congregar en torno de Anapo a toda la izquierda colombiana. Considera difícil medir la fuerza del MAC antes de elecciones, aunque goza de simpatía popular y juvenil.

A pesar de su origen oligárquico, Echeverri cree que "el país tiene que cambiar de sistema y uno tiene que ser consecuente consigo mismo. Uno no puede vivir en la opulencia rodeado de pordioseros... Hay sistemas políticos y económicos donde se da una sociedad más igualitaria, más cristiana, y uno tiene que actuar políticamente en esta di-

rección".

El candidato de la UNO resume su plataforma en tres puntos esenciales:

- 1.- "La ruptura de la dependencia externa y de la explotación imperialista sobre nuestros recursos naturales".
- 2.- "Una profunda revolución educativa que garantice el acceso de las clases populares a una cultura propia, soberana y ajustada a las necesidades del hombre y de la sociedad colombiana".
- 3.- "Una reforma agraria verdadera".

Considera que esta plataforma no es marxista-leninista: "a corto plazo luchamos por una democracia de transición hacia el socialismo, hacia un socialismo que responda a los problemas concretos del país". El capitalismo ya cumplió su meta: el socialismo es el futuro, "es una doctrina humanística que cumple lo que las mismas iglesias no pudieron llevar a cabo: la igualdad y el amor entre los hombres".

No cree en el socialismo a la colombiana de Anapo, sino en el socialismo científico, adaptado al país. Opina que María Eugenia Rojas ha evolucionado un poco, pero el general Rojas es anticomunista cerrado. La plataforma de Anapo es tímida e indecisa frente al problema imperialista y la dependencia externa: tampoco dice nada sustancial sobre la reforma agraria. Pero tiene afinidades con la plataforma de la UNO. Por eso, Anapo no es el enemigo aunque ha decaído y se ha conservatizado: trabajamos paralelamente contra el partido único del Frente Nacional. Echeverri no pierde la esperanza de que Anapo se resuelva a entrar en la unidad popular, aunque se negó anteriormente a hacerlo.

Considera que López y Gómez H. se diferencian solo por matices, pero representan el continuismo paritario y están aherrojados por los grupos económicos y políticos. López es liberal en política pero conservador en economía: Gómez es "conservador con tendencias fascistas en política y ultraconservador en economía". Echeverri afirma que no ha dicho que va a ganar Gómez Hurtado, pero cree que el liberalismo es víctima de un peligroso triunfalismo: en realidad, la lucha entre ambos es muy pareja y la diferencia entre los dos no pasará de 200.000 votos. No puede descartarse el triunfo de Gómez H., ya que López no ha penetrado en el pueblo, ni en las fuerzas obreras, ni en los campesinos organizados, ni en la Universidad, ni en los abstencionistas. Además, la abstención será más liberal que conservadora. No quiere inflar a Gómez, pero hay que ser realistas: "Gómez adelanta la campaña mejor planeada y financiada, tiene la prensa de provincia, la radio, y además los 4 factores claves del poder: el capital, las fuerzas armadas, la vieja Iglesia y el Gobierno".

Además, de todos modos continúa la paridad: 4 años de lo mismo. Ni Gómez ni López hablan de lo que el pueblo quiere oír: sus discursos son literarios, folclóricos, personalistas. No hablan de los problemas reales ni pueden hacerlo: ni siquiera pueden "profundizar en sus discrepancias, porque representan el mismo sistema".

Democracia Cristiana: Una alternativa diferente

Hermes Duarte, el candidato de la D.C., se presenta como una alternativa diferente: "una alternativa honesta, de dignidad racional, de cambio, de participación, de liberación cristiana...". "Soy el candidato de la justicia social, cristiana, compartida, comunitaria..." A pesar de la imagen

de partido clerical, la Democracia Cristiana es partidaria de la separación amistosa entre la Iglesia y el Estado: plantea lógicamente la eliminación del Concordato: "aunque somos creyentes, no aceptamos ningún tipo de imperialismo, ni capitalista, ni marxista, ni del Estado Vaticano".

Duarte opina que la Democracia Cristiana es un partido joven: no es un partido de masas porque el sistema todo se lo prohibía. Por eso, no sabe cuántos votos tendrá: el pueblo lo dirá. Pero aspira a canalizar la abstención: "los 5 millones de abstencionistas tienen toda la razón cuando se marginan, porque no tienen aliciente, no son invitados ni participantes en el proceso y en la conducción del país. Pero la solución no es abstenerse para después romper las paredes ante un sistema que continúa injusto. La solución es tomar una opción y debe ser nueva, de cambio, honesta, de participación, cristiana, de liberación".

Los cuatro candidatos restantes quieren cambiar las cosas con estructuras del siglo pasado. La D.C. cree que el sistema capitalista debe ser reemplazado por un sistema de economía comunitaria y piensa robustecer el sector de la economía solidaria: uno de los objetivos de la D.C. es crear una cooperativa de consumo en cada municipio. Considera también que la explotación del campo debe ser comunitaria: se deben expropiar terrenos incluso suficientemente explotados, si hay problemas sociales que los justifiquen.

Duarte distingue tres áreas básicas en la economía, que corresponden a tres niveles de propiedad: el personal, "al que tiene derecho todo ciudadano porque no se le puede negar bienes de uso y consumo para su bienestar". Pero estos bienes irán a tomar un camino distinto al de la explotación del hombre por el hombre. El segundo nivel es de la

economía solidaria, o sea el sector de las empresas comunitarias, de las empresas de trabajadores, de las cooperativas, etc. El tercer sector, que es el de la propiedad estatal que comprende todos los bienes de soberanía nacional, de recreación y de bienestar social. Las finanzas nacionales tienen que ser del Estado o de entidades de gestión comunitaria".

Considera Duarte que hay que robustecer la economía solidaria "donde el trabajo es el centro y el capital viene a ser un accesorio del trabajo" y debilitar "el sector de la propiedad personal, absoluta, inalienable... en el que el que tiene dinero, tiene todo"... "Hoy estamos en manos del primer sector, del sector capitalista en donde el trabajo es un accesorio ridículo al pie del capital... Tampoco debemos caer en el tercer sector, o sea... caer en manos del Estado en forma total... Esa tampoco es la solución..."

Según el candidato de la D.C., la solución de los problemas nacionales solo se logra "concientizando a las gentes en la necesidad de organizarse en gremios, sindicatos, asociaciones de usuarios, juntas vecinales, comités de madres, cooperativas, clubes juveniles, etc. Y a partir de esta organización, hacer participar al pueblo en las decisiones nacionales".

ANAPO: "Socialismo a la colombiana"

La ANAPO sigue experimentando deserciones entre sus mandos medios: muchos de los miembros de los comandos anapistas de Medellín regresaron a los partidos tradicionales. Esta deserción puede perjudicar más a la ANAPO que la de los parlamentarios, que generalmente carecen de fuerza

electoral propia, por lo que la candidata María Eugenia los llamó "parlamentarios jubilados". Los comandos anapistas han sido claves en los avances electorales del tercer partido: a su cargo está la agitación electoral en los barrios populares.

Pero es evidente el progreso ideológico logrado por la ANAPO, que ha clarificado posiciones ante los problemas claves del país. Este avance se debe a la asesoría intelectual de Antonio García, gran conocedor de la problemática nacional. A largo plazo, esta labor puede tener una trascendencia mayor que las presentes elecciones.

María Eugenia Rojas resume el "socialismo a la colombiana" en el campo internacional como el establecimiento de relaciones con todos los países, incluidas China y Cuba, y la defensa de una independencia total económica y política frente a los demás países. En el aspecto interno, se fija en la necesidad de una reforma agraria profunda, drástica y rápida, para lograr un cambio revolucionario en la tenencia de la tierra. Considera, además, que deben ser nacionalizadas todas las áreas estratégicas de la economía: siderúrgicas, petróleo, recursos naturales. Critica a los gobiernos anteriores por entregar los recursos nacionales a monopolios extranjeros citando los casos del petróleo, platino, oro. La mayoría de las esmeraldas salen del país por contrabando mientras la Empresa Colombiana de Minas (Ecominas) está quebrada. Especialmente critica la entrega que el actual gobierno va a hacer al Brasil de nuestra riqueza carbonífera, en plena crisis energética. Las nacionalizaciones se harían progresivamente: tampoco se pretende estatizar todo sino solo las áreas estratégicas.

María Eugenia opina que el gobierno de Rojas fue el primer gobierno nacionalista que tuvo el país: "una de las

razones de ser la ANAPO es la lucha por la liberación nacional y la independencia económica y política. Pero tampoco se trata de salir de un imperialismo para caer en otro sino buscar una vía latinoamericana como Perú y Panamá. La postura del actual gobierno ante el problema de Panamá es de total entreguismo a los Estados Unidos, en vez de brindarle solidaridad a Panamá en la lucha por su soberanía.

No cree que un eventual triunfo de Anapo tenga como consecuencia un golpe militar: la candidata está convencida de que las fuerzas armadas respetarán la voluntad popular. "El problema es luchar contra una oligarquía voraz y poderosa...". La lucha de clases es una realidad que se vive todos los días: "esto no ha sido inventado por nosotros sino que es producto de la incapacidad del Frente Nacional para solucionar los problemas de la mayoría. Nos acusan de fomentar la lucha de clases, cuando esta ha sido producida por ellos. ¿Cómo no va a existir cuando la tierra está en pocas manos, cuando la industria, el poder político y económico están concentrados en unas pocas familias?".

María Eugenia está muy optimista sobre las próximas elecciones: Anapo le ganó al Frente Nacional unido en 1970, cuando la situación económica era menos grave y había menos conciencia de cambio. La cantidad de gente que ha ido a las 500 manifestaciones que ha hecho le permiten anunciar una buena sorpresa el 21 de abril.

La candidata del tercer partido opina que la UNO no existe: es el partido comunista con otro nombre. No puede haber unidad popular sin ANAPO, que no podía sentarse a conversar con el MAC, "que tampoco existe", gente "salida de mala fe de Anapo. "El MOIR... apenas está surgiendo y no ha hecho sino atacarnos". Hubiera preferido a Gilber-

to Vieira como candidato, que tiene más carisma revolucionario. Esto habría ayudado al partido comunista a consolidar su imagen. (Vieira se había mostrado partidario de adherirse a la candidatura de María Eugenia Rojas, en los comienzos de la UNO).

Ante los candidatos de los partidos tradicionales, la candidata ha asumido una curiosa actitud: evitar los enfrentamientos con López Michelsen y dedicarse a atacar solo a Gómez Hurtado, al cual dijo que "había que cerrarle el paso". Gómez desató la violencia en Colombia y cohonestó los despilfarros del Incora que ahora condena "para lograr" los millones de los latifundistas.

La actitud de la candidata ante López M. se ha prestado a diversos comentarios, pues se recuerda que el candidato liberal interpreta el artículo 120 de la constitución como "paridad no excluyente" y ha afirmado que no descarta la posibilidad de llamar a la ANAPO a participar en su gobierno, respetando la paridad entre conservadores y liberales.

López Michelsen: Una posición cada vez más derechista que no se atreve a confesar su nombre

Es difícil encontrar diferencias de fondo entre los candidatos de los dos partidos tradicionales: en los puntos más fundamentales como el de la Reforma Agraria se asemejan bastante. La campaña electoral se reduce a discusiones fútiles y ataques personales: se discute sobre si los candidatos utilizan el apellido o el nombre, sobre si López fue o no amigo del Frente Nacional, sobre si Colombia necesita o no un presidente vallenato, sobre la propuesta de Gómez de

darle un bulldozer a cada municipio. Se dice que López no tiene propósitos claros y se atiene a lo que va saliendo, que Gómez es un "puestero", un turista del Frente Nacional, que López es favorable a la violencia porque ofreció amnistía a los guerrilleros y proclamó que no tiene enemigos a la izquierda, que Gómez cohonestó la subversión al recibir dentro de los cuadros conservadores a la gente comprometida en el golpe militar contra la Junta Militar en 1958. Se entabló una polémica sobre si López era partidario de la desmembración de Antioquia por la creación del departamento de Urabá. (El Colombiano de Medellín trató de explotar el regionalismo antioqueño en contra de López utilizando este tema).

El candidato liberal López Michelsen se ha quejado repetidas veces de que los medios de comunicación social, sobre todo de orientación conservadora, tergiversan sus planteamientos. Aunque no le falta razón en sus quejas, parece que las tergiversaciones son facilitadas por la ambigüedad de algunas de sus posiciones y el estilo poco claro de sus improvisaciones. Sin embargo, a pesar de su campaña, la manifestación que lo acompañó en su inscripción parece despejar las dudas sobre su triunfo en abril.

Hasta ahora, pocas cosas distinguen a los dos candidatos: López hace énfasis en la política de ingresos y salarios como la panacea para frenar el alza del costo de la vida y redistribuir más equitativamente el ingreso. (Cfr. Artículo de fondo de este número de Anali-CIAS). A esto habría que añadir la constante crítica al desarrollismo del candidato conservador que hace López, porque conduce a una mayor concentración del ingreso. En el fondo, López parece tan desarrollista como Gómez: solo se diferencian en que el primero insiste en la necesidad de una mejor redistribución del

ingresos, pero sin indicar medios concretos para lograrla. Varios economistas, incluso partidarios de López, opinan que una política de ingresos y salarios no tiene ningún efecto redistributivo.

Otra de las diferencias entre los candidatos es la posición de López ante la universidad, que parece ser más tolerante, pues anunció que en su gobierno no habría delitos de opinión. Con respecto a la Anapo, su posición también es más tolerante: parece ser partidario de un acercamiento al tercer partido, apoyándose en la interpretación del artículo 120 en el sentido de una paridad no excluyente. En el aspecto religioso, López ha asumido una postura más liberal al anunciar igualdad fiscal para todas las confesiones religiosas: es aberrante que solo la Iglesia Católica tenga exención de impuestos para sus lugares de culto. Esta última postura suscitó algunas reacciones de parte de obispos y clero: Mons. Naranjo Villegas afirmó que no se puede parangonar la religión católica con las otras por ser la de la mayoría. Mons. Jorge Giraldo dijo que el bien hecho durante siglos por la Iglesia no puede recibir como pago el que se le tilde de "institución con privilegios aberrantes" y estima que si hay agresividad contra la Iglesia, los católicos deben reaccionar. El famoso fr. Severo Velásquez considera que la Iglesia no tiene exenciones sino compensaciones por los despojos y recordó al pueblo católico que "su posición política debe ser muy clara: no sufragar por quienes se muestran en público como enemigos de la unidad de la catolicidad, porque éstos no los representan, no los pueden representar". Este tipo de argumentos podría llevar a algunos representantes de la Iglesia a ponerse en contra del candidato liberal por no "dar garantías a la Iglesia".

Tal vez algo que diferencia más a los candidatos es la

postura de López M. ante el actual gobierno, mucho más crítica que la del candidato conservador. López encuentra contradicciones en la política gubernamental: ¿cómo se compensa el CAT que subsidia las exportaciones con la prohibición de exportar? Para él, la solución para evitar la fuga al exterior de los productos necesarios dentro del país consistiría en el desmonte de los precios políticos buscando conciliar los precios nacionales con los internacionales. De lo contrario, trabajaríamos para los países vecinos favoreciendo las exportaciones clandestinas, que producirán escasez y precios altos. Es necesario ir desmontando gradualmente los precios políticos irrealistas e irlos compensando con un reajuste salarial que contrarreste el alza de precios.

López duda de la constitucionalidad de los Fondos Regionales y le parece inexplicable que el gobierno siga adelante sin tener en cuenta que están demandados y que dependerán del nuevo gobierno. Critica también las medidas antiinflacionarias, que le parecen incompletas: no tienen en cuenta el gasto público ni una política de ingresos y salarios. López cree contradictorio que el gobierno el mismo día dicte la reglamentación de la renta presuntiva y las exenciones tributarias a los UPACS. No está en contra de la renta presuntiva sino de su reglamentación, que "da origen a la tiranía de los mandos medios" y "pone a todos los agricultores a producir un mínimo, so pena de verse expuestos a la expropiación de la Reforma Agraria en condiciones de desigualdad". La exención a los UPACS premia el ocio de quienes solo tienen que sentarse a esperar para cobrar su 30%, mientras se castiga el verdadero trabajo que da riqueza: a los que se arriesgan en agricultura y ganadería, se les determina cuánto deben ganar y se les castiga si no ganan eso.

Esta posición de López, favorable a los grandes latifun-

dios, se asemeja bastante a la posición antirreformista de Gómez Hurtado. La posición del candidato liberal con respecto a la reforma agraria es coherente con la posición adoptada anteriormente. López observa que antes la reforma agraria era una bandera para conquistar el fervor de las multitudes y ahora es baldón y estigma: el partido liberal se ha dejado convencer de que ha sido un hermoso fracaso. López está en desacuerdo: el Incora no ha sido totalmente ineficiente aunque desestimuló la inversión (en esto le da la razón al candidato conservador), pero sus consecuencias no han sido tan desoladoras como se pretende hacer aparecer. Tampoco ha sido demasiado costosa: la mayoría de los gastos del Incora se han invertido en obras de adecuación y no propiamente en el reparto de tierras.

Por eso, propone dividir el actual Incora en dos organismos: un Instituto de Reforma Social Agraria, con recursos propios, para remediar el problema agrario donde se presente, y un Instituto de Aprovechamiento de aguas y de tierras, encargado de las obras de adecuación. Esta división aporta mayor claridad sobre el problema agrario: hasta ahora, el Incora, por dedicarse a problemas locales, no ha podido atender los problemas agrarios más apremiantes.

Considera el candidato liberal que el problema agrario colombiano debe considerarse en función de los últimos avances tecnológicos y, "si es posible, mejorando la situación del campesinado en determinadas regiones... pero no repartiendo tierras, pues lo mismo da explotarla por un patrón que por diez peones con azadón y estiércol". Cree que la reforma agraria concebida como reparto de tierras es un anacronismo y que "el Incora no puede ser una lonja de propiedad rural que sirva de intermediario entre vendedores y compradores al precio corriente". "Hay que pensar en coopera-

tivas u organizaciones de otra clase y sacarnos de la cabeza la idea del reparto, apelando a estadísticas que muchas veces no corresponden a la realidad".

Opina López que, en gran parte, el problema agrario colombiano se debe a un error de influencia: existen mitos sobre la cuestión agraria por la influencia comunista y "paradójicamente, de economistas americanos basados en datos estadísticos no autorizados". Se muestra también extrañado por el hecho de que el gobierno de Caldera hubiera asentado más familias en 4 años que el Incora en 12, sin despertar en Venezuela el tema tantas controversias como aquí.

Por todo esto, López es partidario de poner en práctica el acuerdo de Chicoral en vez de introducir nuevas reformas a la reforma agraria: hay que dejarla que opere un tiempo para ponerla a prueba en vez de desalentar la inversión con la amenaza de una nueva reforma, que colocaría al agricultor en perpetua interinidad. En Chicoral hubo una especie de canje de intereses entre la posibilidad de expropiar tierras adecuadamente explotadas y la forma de pago. El acuerdo logrado facilita la expropiación de tierras explotadas pero mejora las condiciones del pago.

En el campo internacional, López es partidario de las relaciones con los países socialistas, indispensable mercado para nuestro café. En el asunto de Panamá, considera que la primera obligación de la cancillería es la defensa de nuestros intereses ante los de cualquier otro país y que los EE.UU. están obligados a garantizar nuestro derecho de paso por el Canal si Panamá se opone. Es partidario el candidato liberal de una conferencia mundial para tratar el problema de las empresas multinacionales, que atentan no solo contra nuestra soberanía sino también contra la de los

el campesino, a pesar de los millones gastados. Además, el Incora ni siquiera hace propietario al campesino. La reforma agraria creó conceptos importantes y dió al Estado la capacidad de expropiar tierras: esto permite corregir situaciones de presión demográfica. Pero debe cuidarse que la expropiación y "sobre todo en que el pago por debajo del precio real no signifique la destrucción del ánimo empresarial", desestimula la producción y haga subir el costo de vida. Gómez está convencido de que al campesino le conviene más "una política agraria que le permita ganar más aunque no tenga tierras". "El poseerla significa muchas veces una forma de morir de hambre sobre un terreno propio". La política agraria comprendería el suministro de insumos, el fomento de créditos rurales y la tecnificación agrícola:

Sus elogios por la suspensión de la renta presuntiva, indican también su posición: es una medida realista y oportuna, pues la renta presuntiva era un elemento perturbante y desanimador de la inversión, resultado de una serie de transacciones entre el sentido común y la ola de demagogia que azotó al país los años pasados. Además, la evasión es una forma de subsidio para el agricultor. Por otra parte, el nuevo impuesto se presta a la corrupción administrativa.

Estos planteamientos contrastan con la posición asumida con respecto a los impuestos al clero: Gómez opinó que era algo muy accidental dentro de la gran evasión de impuestos que se debía controlar. Luego trató de utilizar el argumento religioso en contra de López: suprimir las exenciones al clero era perseguir "a los sacerdotes humildes y pobres" buscando halagar a los socialistas como había hecho con su propuesta de divorcio para el matrimonio civil.

Uno de los rasgos característicos de los programas del

candidato conservador es su marcado antiestatalismo: el Estado es mal inversionista, mal socio, mal patrono y mala paga. Necesita el concurso de la empresa privada, "unidad básica de nuestro sistema económico", cuyo "fin prioritario... debe servir mejor a la comunidad y coadyuvar a la promoción social del trabajador". Considera Gómez que el capital tiene todo derecho a esperar rendimiento, sin exceder la ganancia razonable ni sobreponerse a las necesidades sociales. La empresa privada debe irrigar a todos los individuos los beneficios del desarrollo a través del empleo y el establecimiento de condiciones atractivas que estimulen la participación creciente de pequeños ahorradores: "solo en esta forma podremos alcanzar la verdadera distribución de la propiedad y una mayor participación de toda la comunidad en las decisiones económicas".

Gómez opina que el Estado tiene dos funciones fundamentales: producir el desarrollo y administrarlo. Si no se consigue un desarrollo siquiera proporcional al crecimiento demográfico, nos pondríamos a repartir miseria. Es consciente de que "el desarrollo presenta riesgos, tal vez duela. Implica el que la libre empresa, la iniciativa personal puede causar de pronto concentraciones de ingreso." Mas para eso está el gobierno, para administrar el desarrollo de manera que no concluyamos en una estructura contrahecha, peor que la existente".

El candidato conservador se muestra muy interesado en la evolución del liberalismo porque sabe que deberá gobernar con él, pero necesita "que no se aparte de las tradiciones republicanas. Si todos defendemos la libertad, pues nos pondremos fácilmente de acuerdo. Vamos a ganar nosotros con un liberalismo republicano que crea en la empresa privada, en el estado de derecho, en el desarrollo". En cam-

bio, "si el partido liberal... se inclina por los caminos de la izquierda en donde la libertad empieza a perder importancia frente a supuestas situaciones de orden social, y al totalitarismo de estado del socialismo, en ese momento nos va a costar más trabajo entendernos con un partido que abandona su puesto histórico para entrar por el camino revolucionario". Por eso se preocupa por los planteamientos de López, que se presenta como "una izquierda maquillada" sin pronunciarse claramente sobre nada: "nadie puede saber a ciencia cierta cuál es la ubicación exacta del candidato..." aunque ha afirmado que no tiene enemigos a la izquierda. Esto, para Gómez, significa estar de acuerdo con la subversión.

Introducción (viene de la pág. 11)

que la industrialización debe seguir el modelo señalado por los países que han logrado "modernizarse" por medio de reformas sustanciales (agraria, tributaria, etc.), pero sin traumatismo ni violencia.

La corriente contraria exige una transformación radical de todo el sistema estructural existente, su realización supone ingerencia en todos aquellos puntos de A, B, C, D y E (Cf. esquema) en donde se concentran los núcleos del poder económico y político. Ahora bien, si el solo hecho de cuestionar las situaciones de poder, radicaliza la violencia institucionalizada, latente o manifiesta del sistema, es evidente que todo propósito concreto de subvertir el orden establecido debe responder consecuentemente a este presupuesto.

Rasgos Fundamentales de la Estructura Económica Colombiana

1.- Estructura externa

El conjunto de las relaciones económicas del país con el extranjero se caracteriza por una marcada situación de dependencia con respecto a las grandes potencias capitalistas, sobre todo a los Estados Unidos (Esquema I opción 1). La dependencia económica, que se ejerce fundamentalmente a través de las pautas de consumo, de las relaciones financieras, coloca a Colombia como a todos los países en vía de desarrollo en una posición de desventaja y de sujeción frente a los países industrializados tal, que los primeros se ven obligados a soportar la explotación de sus riquezas por parte de los segundos, y a aceptar las líneas económicas que ellos les imponen.

2.- Estructura interna

La estructura económica interna de un país se determina por la distribución en él de la propiedad de los medios de producción, del poder económico, y de los frutos del proceso productivo de la economía. La economía colombiana, siguiendo el modelo capitalista, se caracteriza por la preponderancia del sector privado sobre el público. Ello implica una marcada concentración de la propiedad de los medios de producción, por la cual unos pocos acaparan la casi totalidad de estos. La situación conlleva una concentración paralela del poder de decisión en la economía (política económica) detentado por el mismo grupo reducido de poseedores del capital. La concentración de la propiedad y del poder económico dan lugar a una distribución extremadamente desigual del ingreso o producto social, que acarrea enormes diferencias en el nivel real de vida (vivienda, educación, etc.). Esta estructura se realiza y actúa a través de todos los sectores de la economía nacional.